



comisiones obreras de asturias
comisiones obreres d'asturies

Oviedo, 21 de diciembre de 2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE CCOO DE ASTURIAS

Para seguir avanzando en la buena dirección

Celebramos este último Consejo del año coincidiendo con el ecuador de la legislatura política, y vivimos unas semanas trepidantes para inclinar la balanza más al lado de las luces que de las sombras.

Como venimos señalando, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, con nuestro empuje, ha afrontado la crisis con políticas de inversión y protección social, a diferencia de los recortes salvajes impuestos por el PP.

La recuperación del diálogo social y la presión de los sindicatos han sido claves para alcanzar hasta ahora hitos muy relevantes: los ERTE, la subida del SMI y el acuerdo de pensiones. Toca concretar la nueva reforma laboral, que debe restablecer los derechos de la clase trabajadora y el equilibrio en la negociación colectiva.

Pero tampoco podemos ignorar los fracasos, como el ingreso mínimo vital y el estatuto electointensivo, ni dejar de denunciar la incapacidad de Gobierno para atajar los desorbitados precios de la luz. En el caso de nuestra comunidad autónoma habría que sumar asuntos pendientes propios: el peaje del Huerna y la penosa situación de la red de cercanías, entre otros.

En Asturias estamos empujando para ir en la buena dirección, por ejemplo con el nuevo acuerdo de concertación social que, eso sí, requerirá de la aprobación de los presupuestos que recogen la dotación para las medidas acordadas y sienten las bases de la recuperación que Asturias necesita, con una economía de base industrial, tecnológica y sostenible, empleo decente y salarios dignos, protección social, servicios públicos reforzados y más igualdad real en todos los ámbitos.

Finalmente, las organizaciones empresariales tienen que ponerse a la altura de las circunstancias y dejar de verlas venir. Tras recibir el apoyo del Estado (gracias a los impuestos que tantas veces denuestan), ahora es el momento de que inviertan buena parte de sus beneficios y desbloqueen la negociación colectiva para dignificar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.

En otro orden de asuntos nos gustaría destacar que la Fundación Juan Muñiz Zapico, creada por Comisiones Obreras de Asturias en 1990 con el objetivo de preservar la memoria del movimiento obrero y fomentar y difundir la cultura del sindicalismo (particularmente de CCOO) y del mundo del trabajo, tiene nuevo presidente. Darío Díaz sucede en el cargo a Francisco Prado Alberdi (Bustiello, Mieres, 1945), histórico sindicalista de Comisiones Obreras, que lo ha ejercido desde hace más de 20 años, demostrando en este tiempo su infatigable compromiso con la memoria democrática y el papel de nuestro sindicato en la lucha contra la dictadura franquista y la conquista de las libertades. Y al que siempre le estaremos agradecidos por su ejemplo militante.

Seguir subiendo el salario mínimo

La subida del salario mínimo es uno de los grandes logros sindicales. Llevábamos tiempo denunciando que teníamos un SMI de los más bajos de nuestro entorno y que el número de personas trabajadoras pobres estaba creciendo de forma alarmante.

Se han dado pasos, pero todavía falta para cumplir con lo establecido por la Carta Social Europea de situar el SMI en el 60% del salario medio neto en esta legislatura. Se lo recordamos al Gobierno en las concentraciones que llevamos a cabo este año para exigir también la derogación de la reforma laboral y la de pensiones, porque se mostraba reacio a hacerlo.

Por eso valoramos positivamente el acuerdo de octubre para subirlo (aunque fuera de forma exigua, 15 euros, hasta los 965). Pero insistimos en que tiene que seguir haciéndolo, hasta los 1.000 euros en 2022 y 1.050 en 2023. Beneficiará a los colectivos más vulnerables y a muchas personas trabajadoras de sectores esenciales, más de 25.000 en Asturias, según estimaciones del sindicato. Nuestro país sufre un gravísimo problema de desigualdad y pobreza laboral que exige la subida progresiva del salario mínimo, para recortar brechas y estimular además el crecimiento económico.

Mejores pensiones

El 1 de julio el Gobierno y los agentes sociales firmamos un importante acuerdo para garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, gracias al cual tendremos pensiones más justas, con nuevos derechos. Pero aún queda una segunda fase de la negociación, en la que nuestras prioridades pasan por subir las mínimas y no contributivas, y reducir la brecha en materia de pensiones. También hay que abordar las cotizaciones por ingresos reales del trabajo autónomo, las de jóvenes en prácticas no laborales...

En cualquier caso, el principal objetivo, además de revalorizar las pensiones conforme al IPC, era derogar el factor de sostenibilidad impuesto en la reforma del Partido Popular, sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional, que va a repartir de un modo equilibrado entre generaciones, vía incremento de cotizaciones, el esfuerzo para reforzar el sistema, evitando los recortes de la pensión que suponía el factor de sostenibilidad. Es más

justo y solidario, pero sobre todo pasamos de la lógica de actuar sobre el gasto (recortes) a la vía de incrementar los ingresos del sistema para garantizar pensiones de calidad.

Decisiva reforma laboral

La ministra de Trabajo ha reiterado que “la reforma laboral más importante de la democracia” estará lista antes del 31 de diciembre para cumplir con el compromiso con la Unión Europea. La voluntad del Gobierno es que lo avalen sindicatos y patronal, lo que la UE también entiende que “sería bueno”. Pero “ahora mismo no está garantizado un acuerdo tripartito, ni siquiera del Gobierno con los sindicatos”, advirtió nuestro secretario general, Unai Sordo, el día 14 de diciembre.

CCOO ha recalcado que si el acuerdo no contempla la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad, no lo suscribiremos. Poner coto a la temporalidad está siendo otro escoyo.

Negociación colectiva pendiente

Sin duda, la reforma laboral que estamos tratando de derogar debilitó enormemente nuestro poder contractual. Pero la pandemia también ha sido utilizada por la patronal para paralizar la renovación de los convenios, zancadilleando la recuperación de derechos laborales y salariales.

La cicatera actitud de la patronal es lamentable. Tras haber recibido cuantiosas ayudas en los últimos meses, ahora

que toca corresponder con sus trabajadores y trabajadoras, no lo están haciendo (salvo honrosas excepciones).

Según el último informe del Gabinete Técnico sobre negociación colectiva en Asturias, 37 convenios ya han finalizado su vigencia. Y están pendientes de renovar algunos tan importantes como los del Metal, Montajes y auxiliares, Hostelería, Limpieza, Ayuda a domicilio...

No podemos consentir la pérdida de poder adquisitivo. Basta recordar que el incremento salarial medio pactado hasta octubre fue del 1,5%, mientras el IPC escalaba hasta el 5,6%. Y cuando el número de convenios con cláusula de revisión apenas supera el 5%.

En Asturias lo hemos reclamado recientemente con el acto cultural “Por un Trabajo Decente” del pasado 23 de noviembre, y lo estamos exigiendo con la movilización: buenos convenios, con condiciones dignas y salarios decentes. Como hemos recalcado: o hay reparto, o habrá conflicto. También a nivel confederal se está reclamando a la patronal la negociación, cuanto antes, de un nuevo AENC. En Madrid, Valencia y Valladolid se convocaron ya las primeras movilizaciones el 16 de diciembre bajo el lema “Pagad más”.

Recuperar lo arrebatado

Nuestro sindicato inició el 10 de noviembre movilizaciones del área pública en todo el país. Las reivindicaciones están claras: hay que recuperar el empleo público perdido y el poder adquisitivo de los salarios, estabilizar las plantillas y acabar con la lacra de la temporalidad. También negociar un acuerdo marco para la Administración Local (respetando

el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito), recuperar y extender la jornada de 35 horas y aprobar los planes de igualdad.

El manifiesto leído ese día en Oviedo por el responsable del Área Pública de CCOO de Asturias, Borja Llorente, reclamaba el aumento de la inversión pública en los servicios esenciales para la ciudadanía que permita garantizar la financiación de la educación, la sanidad (también hemos vuelto a salir a la calle exigir el fortalecimiento del sistema de salud público, en especial de la atención primaria), los servicios sociales y la dependencia, así como aumentar las inversiones en infraestructuras, cohesión social y territorial, en I+D+i, digitalización, formación y cualificación de las trabajadoras y trabajadores públicos.

Sigue la incertidumbre industrial

El fracaso del estatuto para la industria electrointensiva, la debilidad del Gobierno ante el oligopolio eléctrico y la escalada de los precios de la luz han formado una tormenta perfecta que amenaza seriamente nuestra industria, además de empobrecer a la sociedad en su conjunto.

CCOO ha insistido en la urgencia de mejorar el estatuto porque el actual carece de mecanismos para reducir efectivamente el coste energético, y porque las industrias electrointensivas continúan realizando ajustes en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras. Es una losa para Asturias, que no sale de la emergencia industrial.

CCOO pide reformar el mercado eléctrico y articular un nuevo sistema de fijación de precios. Para aliviar la

situación, también estamos demandando que se garantice presupuestariamente la máxima compensación por el CO₂. España necesita tomar medidas tangibles en política industrial.

Asturias está sufriendo además una transición energética desbocada e injusta. Porque nos hemos quedado con los cierres y sin alternativa alguna. Y ya es hora de revertir esto también.

La concertación y los presupuestos

CCOO, UGT, FADE y el Gobierno regional estamos cerca de poder firmar un nuevo y ambicioso acuerdo de concertación en Asturias. El diálogo social vuelve a dar sus frutos. Y como siempre hemos defendido: sumando esfuerzos multiplicamos los resultados.

Tras el pacto de urgencia alcanzado en agosto del pasado año para hacer frente a la pandemia, este tiene que servir para consolidar la recuperación, afianzando la industria y haciéndola más tecnológica y sostenible, para una Asturias con empleo estable y salarios dignos, mejor protección social, servicios públicos reforzados, y mayor igualdad en todos los órdenes.

Hemos llevado la iniciativa en la negociación y logrado incorporar asuntos de máxima relevancia: el reconocimiento explícito de la concertación (también del CES, que hay que recuperar, y del SASEC, que necesita potenciarse), elevando al máximo rango legal el diálogo social como política vehicular de Asturias en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía; otorgar mayor peso a la innovación y a la industria en el modelo económico de

futuro; combatir la precariedad generalizando la inclusión de cláusulas sociolaborales en los pliegos de contratación de la Administración; la aprobación del plan de igualdad para la plantilla de trabajadoras y trabajadores del Principado; el impulso a los planes locales de empleo..., y que Asturias asuma la gestión del ingreso mínimo vital.

Para que las medidas de la concertación se sustenten económicamente es imprescindible que se aprueben los presupuestos que las recogen. Como hemos manifestado en la Junta General del Principado de Asturias, se necesitan unos presupuestos orientados hacia la izquierda, que afiancen el nuevo modelo productivo que necesita la región y atiendan a las necesidades reales de la clase trabajadora, fortaleciendo los servicios públicos y aumentando la tributación sobre las rentas y patrimonios más altos, es decir, los ingresos vía impuestos directos. Se tiene que aprovechar el incremento de fondos para salir fortalecidos de la crisis sanitaria y fomentar la igualdad social.

Frenar a la extrema derecha

En los últimos años, como fruto de las contradicciones del sistema capitalista, se ha producido un evidente auge de la extrema derecha y la extensión de su discurso del odio, siendo cada día más preocupante. Y hay que hacerle frente.

A nivel internacional son múltiples los ejemplos de organizaciones ultras que han ido tomando posiciones en las instituciones democráticas para minarlas. Desde Bolsonaro en Brasil, a Salvini en Italia, pasando por Trump

en EEUU. También el Frente Nacional en Francia es un buen ejemplo de esa red de organizaciones que colaboran entre sí para hacer avanzar sus posiciones.

Lo cierto es que vivimos en un contexto marcado por la desigualdad, la precariedad y la incertidumbre. Además, opera el hartazgo hacia las fórmulas políticas tradicionales y cunde la decepción tras la crisis de los partidos emergentes. A todo esto, hay que añadir las consecuencias de la crisis provocada por la Covid (en términos de empleo, desigualdad y pobreza) que, en su mayor parte, aún persisten.

Este escenario constituye un terreno abonado para las opciones ultras y de extrema derecha.

También en nuestro país. Así que no valen medias tintas. Como la mayor organización, y sindicato sociopolítico que somos, Comisiones Obreras tiene la responsabilidad de desenmascarar y denunciar sus mensajes y comportamientos, que socavan la democracia, dividen a la sociedad y atacan los derechos laborales y cívicos que tanto nos ha costado alcanzar.

Es necesario evitar que adquieran protagonismo y enfrentarlos con sus contradicciones. La agenda pública y la calle con los temas que no les interesa tratar. Y hay que evitar que canalicen el descontento, desenmascarando sus verdaderas intenciones: respecto al despido libre y la privatización del sistema público de pensiones, su apoyo al copago y a la reducción de la cartera de servicios de la sanidad pública, su rechazo al Ingreso Mínimo Vital...

Asimismo, hay que explicar que los déficits en materia de infraestructuras en buena parte de nuestro territorio se deben entre otras razones a la falta de recursos públicos, esos que se nutren fundamentalmente de impuestos y tributos..., cuando la posición política al respecto de la extrema derecha es de complacencia con la evasión y la elusión fiscal, y el recorte de impuestos a las rentas más altas, incompatibles con un Estado social y de derecho que necesita músculo para financiar todas sus inversiones.

Además, en la raíz de los problemas de nuestro medio rural se encuentra el sistema económico de libre mercado que defiende a ultranza la extrema derecha, ya que es responsable de favorecer a las multinacionales e intermediarios en detrimento del productor local, bien sean explotaciones agrícolas o ganaderas, y que se quedan con los grandes márgenes de beneficios. Esta es la verdadera causa de que se vacíe una buena parte del país.

En definitiva, frente al odio y el ruido que siembran, tenemos que defender un modelo de convivencia democrática y mejorar la vida de la gente humilde, de los trabajadores y trabajadoras.

No son un partido más, son organizaciones que toman las instituciones democráticas para socavarlas y, por lo tanto, no podemos darles carta de naturaleza. Debemos cerrar filas para combatir el avance del fascismo.

No pasarán.